

Presentación

El primer año de su segundo gobierno, el presidente Sebastián Piñera dobló la frustrada apuesta realizada en su primera administración: incrementó las expectativas de su promesa de un mejor gobierno realizada en 2010, proponiendo una segunda transición hacia el desarrollo integral del país para el período 2018-2022.

Parte importante de esta segunda transición implica avanzar en la configuración de una nueva economía que, a través de una alianza público-privada, cree empleos, mejore las remuneraciones, provea una mejor salud y educación, reservándole al Estado la tarea de enfrentar los temas de delincuencia, narcotráfico, terrorismo, y le dé un nuevo trato a los niños y adultos mayores. El costo fiscal total del programa ascendería “a US\$14 mil millones para la totalidad del periodo presidencial”, suma de la que el Gobierno no dispone, dada la situación de la economía y finanzas nacionales. Por su parte, las remuneraciones crecen menos que la inflación y la cesantía sigue en alza, generando incertidumbres en el mercado laboral. La propuesta de reforma tributaria que se enviará al Congreso dificultará la reducción del déficit fiscal, gran objetivo del Gobierno.

Simultáneamente, el Gobierno se ha propuesto retrotraer las principales reformas estructurales realizadas durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, desregulando la actividad privada. Las reformas tributaria, laboral y educacional, el derecho a la conservación medioambiental, el inicio del proceso de redacción de una nueva Constitución, la despenalización del aborto en tres causales, entre otros importantes avances democratizadores, se han convertido en objeto de contrarreformas legales o administrativas tendientes a volver a limitar el espacio de los derechos ciudadanos universales y reducir la función supervisora del Estado. Incluso en aquellas iniciativas aparentemente democratizadoras, como es la eliminación de la Ley del Cobre, se manifiesta el sesgo conservador del Ejecutivo, al mantener los privilegios y autonomía castrenses.

A la amplia tarea transicional han sido convocados sectores de la sociedad civil organizada y los empresarios. Este nuevo enfoque se ha observado en las iniciativas del Ministerio de Desarrollo Social en el ámbito del tema mapuche y de la visibilización de las comunidades vulnerables. En estos últimos campos ha quedado al descubierto el limitado efecto de la acción filantrópica empresarial y sus acciones de responsabilidad social, por lo que el Estado ha debido tomar la coordinación de esos esfuerzos de legitimación del empresariado.

Las diversas manifestaciones con ocasión de la conmemoración y celebración del triunfo del NO en 1988 mostraron que, a pesar de haber transcurrido treinta años desde esa fecha memorable, la resiliencia de la arquitectura política autoritaria aún divide hasta la coalición de gobierno. Y los llamados a la unión de voluntades para implementar políticas públicas consensuadas no se han correspondido con las acciones pertinentes para darles curso, generando profundas divergencias entre el Ejecutivo y la oposición. Caso paradigmático al respecto ha sido la política migratoria. Con todo, el Gobierno ha sabido reponerse de errores mayúsculos, como el del nombramiento del nuevo ministro de las Culturas, el que fue rápidamente reemplazado por quien está enfrentando los problemas de infraestructura y acceso a la cultura y fomentando proyectos creativos.

La sociedad civil se ha vuelto a desmarcar del ritmo y orientaciones gubernamentales manifestándose masivamente, tal como sucedió con las movilizaciones feministas, que presentaron al país una agenda de transformaciones profundas en materia de derechos de las mujeres. Por su parte, los estudiantes han vuelto a contestar el proyecto de Aula Segura y la política educacional en general. A su vez, la imposibilidad de resolver prontamente los problemas de contaminación en Quintero-Puchuncaví, caso emblemático de los 63 conflictos ambientales actualmente existentes, ha mantenido las dificultades en la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Algo similar ocurre en el conflicto mapuche, donde el grueso de las corrientes organizadas acusa un desencuentro con las autoridades y se opone al plan Araucanía. El crimen de Camilo Catrillanca dejó toda esta iniciativa en fojas cero. En el campo sindical, sus problemas de representatividad y convocatoria continúan limitando su unidad orgánica y fuerza de presión.

El conjunto de fracturas y pugnas intra e interpartidarias al interior de la coalición gubernamental Chile Vamos, permitiría explicar las dificultades del Ejecutivo para proporcionarle una clara orientación a su administración en este primer año calendario de gestión, lo que se refleja en una opinión pública desconcertada a pesar de los esfuerzos comunicacionales del oficialismo. Finalizando el año, frente a la necesidad de generar un Plan Nacional de Educación, desde la propia derecha se demanda una "narrativa más amplia que la haga

viable, un discurso más sofisticado capaz de asumir los múltiples desafíos, una auténtica capacidad de proyección y articulación política”.

Su estrategia comunicacional no ha podido conciliar la precipitada iniciativa legislativa del Ejecutivo, con la imagen de control de la agenda gubernamental. El proyecto de ley de Presupuesto, el anuncio (para marzo) de reforma tributaria, los trascendidos sobre reforma a la ley de isapres, el cambio de la Ley del Cobre, la ley Aula Segura, la de Identidad de Género, entre otras acciones, han contrastado con la intención original de amplios consensos nacionales, generando una permanente tensión y conflictos con la oposición parlamentaria.

Los capítulos que siguen en esta decimocuarta entrega del *Barómetro de Política y Equidad* aportan elementos de diagnóstico y análisis en diversos ámbitos claves, lo que esperamos sea de utilidad en el encuentro de vías políticas que permitan materializar las aspiraciones de una efectiva profundización democrática del país.

Pamela Díaz-Romero
Alfredo Rodríguez
Augusto Varas

Editores